

---

# Actitudes ante la redistribución: ¿cómo ha afectado la crisis?<sup>1</sup>

**Inés Calzada Gutiérrez**

ines.calzada@cchs.csic.es

Licenciada en Sociología y en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Salamanca, doctora en Sociología por esta misma universidad. Máster en Metodología para las Ciencias Sociales por la London School of Economics. Ha participado en investigaciones nacionales e internacionales sobre el Estado del Bienestar, interesándose especialmente en las actitudes de los ciudadanos hacia las políticas sociales. Publicaciones recientes: "It's not only about equality. A study on the (other) values that ground attitudes to the Welfare State" (*International Journal of Public Opinion Research*, 2014); "The Myth of Mediterranean Familism: family values, family structure and public preferences for state intervention in care" (*European Societies*, 2013).

**Eloísa del Pino Matute**

eloisa.pino@cchs.csic.es

Científica Titular del Instituto de Bienes y Políticas Públicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPP-CSIC). Doctora en Ciencia Política y de la Administración (UCM) y licenciada en Ciencia Política (UCM) y en Derecho (UNED). Ha sido investigadora visitante en la Universidad de Ottawa (Canadá), en la Universidad de Kent (Reino Unido) y en el Instituto de Estudios Políticos de Burdeos (Francia), entre otros lugares. Su principal

---

1 Este artículo se ha beneficiado de los proyectos de investigación: CRISAUT, CSO2012-33075, financiado por el Plan Nacional de Investigación y "Pensions and Education: Combined Effects on inter and intragenerational redistribution", financiado por La Fundación La Caixa y la Fundación General del CSIC (Proyectos Cero).

área de investigación es la reforma del Estado de Bienestar y sus determinantes políticos, tema sobre el que ha participado y dirigido numerosos proyectos, siendo el más reciente *Capacidad de reforma y estrategias de reforma en los sectores públicos regionales y en las políticas de bienestar en el contexto de la crisis fiscal: determinantes y trayectorias de cambio*. ([http://crisaut.es/?page\\_id=2&lang=es\\_ES](http://crisaut.es/?page_id=2&lang=es_ES))

## RESUMEN

Tanto antes de la crisis como hoy, una gran mayoría de los españoles cree que el Estado debería intervenir para igualar las condiciones de vida de quienes viven dentro del territorio, lo que incluye reducir las diferencias entre clases sociales, entre generaciones y entre inmigrantes y nativos. Esta postura es coherente con el alto porcentaje de gente que abraza principios distributivos de corte igualitario y con un masivo apoyo a las políticas centrales del Estado del Bienestar que la crisis no ha venido sino a reforzar. Sin embargo, la legitimidad del sistema fiscal se ha resentido en los últimos años, lo que puede suponer un problema para la aplicación de nuevas políticas redistributivas y es, a día de hoy, el talón de Aquiles de nuestro sistema de bienestar.

## PALABRAS CLAVE

Redistribución, actitudes, política social, opinión pública, estado del bienestar.

## ABSTRACT

A large majority of Spanish residents consider that the state should decrease differences in the living conditions of the people, what includes reducing differences among social classes; among generations; and also between immigrants and natives. The extended support to state redistribution is consistent with the pervasiveness of egalitarian distributive principles, as well as with a massive popular support to the key programs of the Welfare State that has even grown during the years of economic downturn. However, during the last years we have witnessed erosion in the legitimacy of the tax system. This weakness, that appears the Achilles heel of the welfare system, may be an obstacle for the implementation of new redistributive policies.

## KEYWORDS

Redistribution, attitudes, social policy, public opinion, Welfare State.

### 1. EL APOYO A LA REDISTRIBUCIÓN EN ÉPOCA DE CRISIS

La opinión pública hacia la redistribución y las políticas que persiguen ese objetivo se ve afectada durante las crisis. Sin embargo, como han puesto de manifiesto Clarke *et al.* (2013) en el Reino Unido y Brooks y Manza (2013) para Estados Unidos, las actitudes de la ciudadanía no cambian como un bloque. Mientras algunos segmentos de la población pueden mostrarse más dubitativos en su tradicional apoyo a las políticas redistributivas, especialmente la política fiscal (Franko, Tolbert & Witko, 2013) y las políticas sociales, otros permanecen fieles. Además, no todas las políticas redistributivas tienen por qué verse igualmente afectadas. Los ciudadanos pueden considerar que merece la pena seguir apoyando determinados programas públicos, mientras que otros pueden ser recortados temporalmente, por ejemplo. Asimismo, los estudios sobre merecimiento demuestran que la ciudadanía también puede priorizar la atención a unos colectivos sobre otros, fenómeno que puede verse agudizado por las crisis.

De acuerdo con la llamada hipótesis de la responsabilidad económica, a medida que la crisis arrecia, más gente piensa que es necesario adoptar medidas de austeridad en todas las políticas (Ervasti, Goul-Andersen y Hjerm, 2013). Algunos se vuelven más reacios a financiar (Forma 2002; Andersen et al., 1999), prefieren reservar el dinero en su bolsillo para afrontar por sí mismos la situación de incertidumbre debido a que piensan que no vale la pena apoyar servicios públicos que han podido deteriorarse debido a los recortes (Taylor Gooby, 2010) o, simplemente, no están interesados en la redistribución (Soroka y Wlezien, 2014). Como se ha demostrado, las actitudes hacia la redistribución están formadas por la conjunción de valores e intereses y, en este caso, puede ocurrir que predominen más los intereses que los valores (por ejemplo, Blekesaune y Jill, 2003).

Por otro lado, los más desfavorecidos necesitan más políticas redistributivas, la crisis ha incrementado su percepción de riesgo y ésta se asocia con una preferencia hacia un mayor Estado de Bienestar (Finseraas y Ringdal, 2012). Sin embargo, incluso en este colectivo pueden aparecer dudas sobre las políticas redistributivas si perciben que pagan demasiado mientras sus recursos son

ahora más escasos por efecto de la crisis, o si creen que el Estado que antes apoyaron ahora no es capaz de protegerles como esperaban (Taylor-Gooby, 2010). Algunos estudios recientes sugieren que los ciudadanos ven una conexión entre las políticas públicas y la capacidad de reducir la desigualdad (Bartels, 2005; McCall, 2013; Soroka y Wlezien, 2014).

Finalmente, no todas las políticas son percibidas de la misma manera. Respecto al gasto, la ciudadanía es capaz de distinguir con claridad las políticas públicas y priorizar su importancia en contexto de bonanza. En contexto de crisis, es probable que esta capacidad se agudice aún más, distinguiendo entre el gasto que consideran prioritario y el que no lo es tanto, al menos en esos momentos. Los estudios de merecimiento, por ejemplo, demuestran que los ciudadanos priorizan a determinados colectivos de beneficiarios sobre otros, por ejemplo los jóvenes, los mayores o los inmigrantes (van Oorschot, 2006). Es posible que en época de crisis, estas actitudes se vean también afectadas.

En este artículo nos preguntamos cómo son las actitudes hacia la redistribución en España y en qué medida se han visto afectadas por la crisis que se inició en 2007 y que perdura en el momento de escribir este texto. En concreto, nos preguntamos si las previsiones de la literatura que hemos mencionado sobre un posible cambio en estas actitudes se cumplen también para el caso de España. Para responder a esta pregunta, analizamos datos procedentes de diferentes fuentes. Usamos datos sobre las actitudes hacia el gasto público y la política fiscal del Centro de Investigaciones Sociológicas entre 1985 y 2015, así como la Encuesta Social Europea (ESS) para contextualizar en el marco europeo las actitudes y preferencias de los españoles. También utilizamos una encuesta de elaboración propia entre cuyos objetivos se encontraba ahondar en el marco mental sobre el que los ciudadanos construyen sus actitudes hacia la (des)igualdad y la redistribución. Gracias a los experimentos incluidos en esta encuesta, cuyos resultados se presentan aquí por primera vez, tenemos datos para analizar no solo la redistribución entre clases sociales, sino también las opiniones de los españoles hacia la redistribución entre generaciones y entre inmigrantes y nativos.

El artículo se organiza como sigue: en el segundo apartado, se estudian las actitudes generales hacia la redistribución situando a España en una perspectiva comparada. En el tercer epígrafe, se analizan las actitudes hacia las políticas que potencialmente mejoran la redistribución, es decir, las políticas de gasto, sobre todo en el sector social, y los impuestos. En el cuarto apartado observamos las preferencias sobre qué colectivos merecen en mayor medida el esfuerzo redistributivo. Para acabar, se presentan algunas conclusiones.

## 2. ACTITUDES GENERALES HACIA LA REDISTRIBUCIÓN: ESPAÑA EN PERSPECTIVA COMPARADA

Entre 2002 y 2012, una gran mayoría de ciudadanos, alrededor de un 80 por ciento, se muestra muy de acuerdo o de acuerdo con que la afirmación de que el Estado debería tomar medidas para reducir las diferencias en los niveles de ingresos. A lo largo de este periodo, quienes se han declarado en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta idea no han llegado a superar el 8 por ciento de los que responden a la pregunta.

**Tabla 1.** Distintos grados de acuerdo con que “El Estado debería tomar medidas para reducir las diferencias en los niveles del ingresos” (2002-2012)

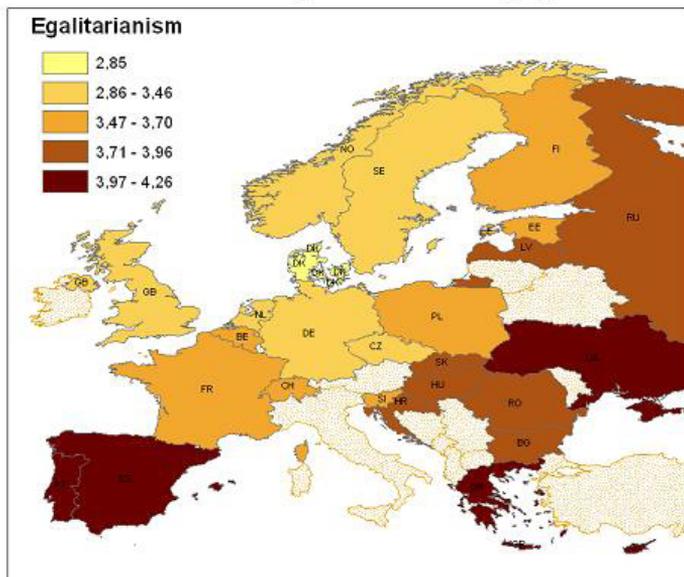
	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Muy de acuerdo	30.1	27.5	34.5	27.5	32.4	35.0
De acuerdo	49.6	52.2	49.4	52.3	48.7	48.4
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	13.8	12.7	9.6	12.9	11.3	9.9
En desacuerdo	5.7	6.5	5.6	6.4	6.7	6.0
Muy en desacuerdo	0.8	1.2	1.0	1.0	1.0	0.7

Fuente: elaboración propia con datos de la ESS. Los datos correspondientes a la ola de 2014 no están aún disponibles para España. Pregunta: Dígame, por favor, hasta qué punto está usted de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: El gobierno debería tomar medidas para reducir las diferencias en los niveles de ingresos.

Usando la Encuesta Social Europea (ESS) podemos ofrecer una panorámica del apoyo a la redistribución en varios países hasta el último año disponible (2012). En el Gráfico 1 se muestran las respuestas dadas por los ciudadanos de distintos países a la misma pregunta, cuyos resultados para España presentamos en la Tabla 1: “Dígame, por favor, hasta qué punto está usted de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: El gobierno debería tomar medidas para reducir las diferencias en los niveles de ingresos”. Las cinco opciones de respuesta se han agrupado en tres para favorecer la legibilidad: “muy de acuerdo”+ “de acuerdo” (barra azul); “ni de acuerdo ni en desacuerdo” (barra roja); “en desacuerdo” + “muy en desacuerdo” (barra verde). Como vemos, España aparece en una posición destacada cuando comparamos las actitudes hacia la redistribución en Europa.



**Gráfico 2. Distribución de “Para que una sociedad sea justa las diferencias entre los niveles de vida de la gente deberían ser pequeñas”.**



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Social Europea (2008) y el programa ArcGIS. Las puntuaciones de cada país van de 1 (muy baja extensión de valores igualitarios) a 5 (muy alta extensión de valores igualitarios).

Utilizando nuevamente una perspectiva comparada, el mapa muestra el grado de acuerdo o desacuerdo de los residentes en cada país con la frase: “Para que una sociedad sea justa las diferencias entre los niveles de vida de la gente deberían ser pequeñas” (Gráfico 2). Para cada país se ha calculado la media nacional de las respuestas que van de 1 (muy de acuerdo) a 5 (muy en desacuerdo)<sup>2</sup>. Un tono más oscuro, como el que aparece en España, indica una mayor extensión de valores igualitarios. Los datos corresponden a 2008, pero a la vista de los datos presentados más arriba solo sobre el caso español, los cam-

<sup>2</sup> Los países que aparecen en el gráfico son: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Grecia, Hungría, Letonia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Rumanía, Rusia y Ucrania. La muestra total correspondiente a estos 26 países es de 50.082 casos. Las diferencias entre países que muestran los mapas son estadísticamente significativas utilizando ANOVA. La clasificación de países en grupos (identificados por distintos tonos) ha sido calculada utilizando el algoritmo del método de cortes naturales de Jenks. ArcGIS permite utilizar diferentes algoritmos para seleccionar los puntos de corte que se ajustan mejor a la estructura de los datos. El método de Jenks se basa en minimizar la variación dentro de cada grupo y maximizar la variación entre grupos mediante cálculos iterativos (similar al análisis de conglomerados). En otras palabras, se asigna el mismo color a países con niveles de igualitarismo estadísticamente similares entre sí y estadísticamente distintos del resto.

bios en este ámbito de las actitudes han sido menores. Además, hemos preferido ‘mapear’ esta pregunta (que sólo se incluyó en la Encuesta Social Europea de 2008), porque en las siguientes secciones la utilizaremos para ahondar en la idea de igualitarismo que tienen los españoles.

### **3. ACTITUDES HACIA LAS POLÍTICAS DE GASTOS E INGRESOS**

Como hemos comprobado más arriba, los ciudadanos apoyan que el Estado adopte medidas que puedan mejorar la redistribución de la riqueza. Es conocido que disponer de empleos de calidad es una de las principales condiciones para lograr redistribuir los recursos en una sociedad y reducir la desigualdad. Además, los estados contemporáneos llevan a cabo toda una serie de actuaciones con potencial redistributivo, especialmente las políticas sociales y las políticas fiscales.

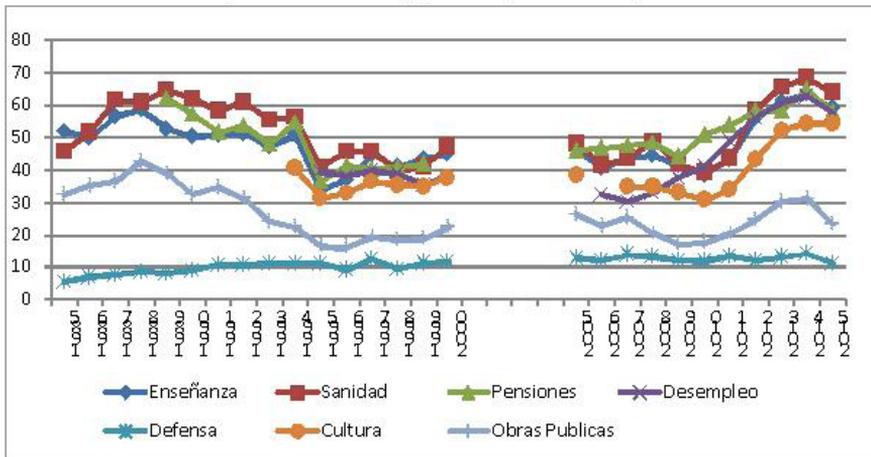
#### **3.1. Actitudes hacia las políticas de gasto, en especial, las políticas sociales**

Como ya hemos explicado en anteriores artículos, la ciudadanía muestran distinto grado de apoyo a las diferentes políticas siendo las políticas sociales las más apreciadas (Del Pino y Calzada 2015). El impacto de la crisis en las actitudes también es distinto según el sector de política. En el Gráfico 3 presentamos la evolución del porcentaje de ciudadanos que considera que el gasto en diferentes políticas es “muy poco”. Desde 1995 y 1996, fecha aproximada de la salida de la anterior crisis que sufrió España y hasta 2011 y 2012, momento en que comienzan a realizarse los primeros recortes de la crisis actual, el porcentaje de ciudadanos que consideraba que los recursos destinados a sanidad, educación o pensiones eran pocos, se había mantenido estable, en torno al 40 por ciento. En este periodo un porcentaje similar consideraba que los recursos gastados en estas políticas eran los justos (solo alrededor de un 6 por ciento pensaba que los recursos gastados eran demasiados). A partir de 2013, el porcentaje de quienes piensan que se gasta muy poco en estas políticas sociales escala del 40 a más del 60 por ciento en 2014. En el caso de la atención a las personas en situación de dependencia, política por la que se pregunta solo a partir de 2011, el porcentaje de quienes piensan que se gasta muy poco pasa del 52 en 2011 al 72 en 2014. En todos los casos, parece descender ligeramente en 2015 (Gráfico 4).

Para tener un punto de referencia con el que comparar las políticas sociales, que como hemos dicho son las más redistributivas, presentamos aquí algunos datos sobre otras políticas públicas. El porcentaje de quienes creen que

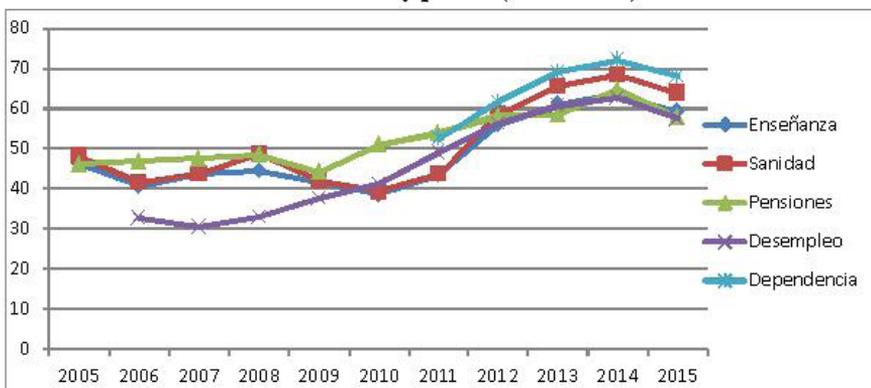
el gasto en otras políticas como la cultura o las obras públicas es muy poco descendió antes de la crisis hasta un 37 y un llamativo 17 por ciento respectivamente. Sin embargo, creció después de los primeros ajustes, sobre todo en el caso de la cultura, aunque sin alcanzar los niveles de las políticas sociales. A diferencia especialmente de las políticas sociales, los recortes no han hecho variar el porcentaje de personas que consideraba que el gasto en defensa es demasiado poco, que se mantiene alrededor del 12 por ciento (Gráfico 3).

**Gráfico 3. Ciudadanos que opinan que los recursos gastados en varias políticas públicas son "muy pocos" (1985 a 2015)**



Fuente: elaboración propia con datos del CIS. Pregunta: Como Ud. sabe, las distintas administraciones públicas destinan el dinero que en España pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y prestaciones de las que venimos hablando. Dígame, por favor, si cree que dedican demasiados, los justos o muy pocos recursos a cada uno de los servicios que le voy a mencionar.

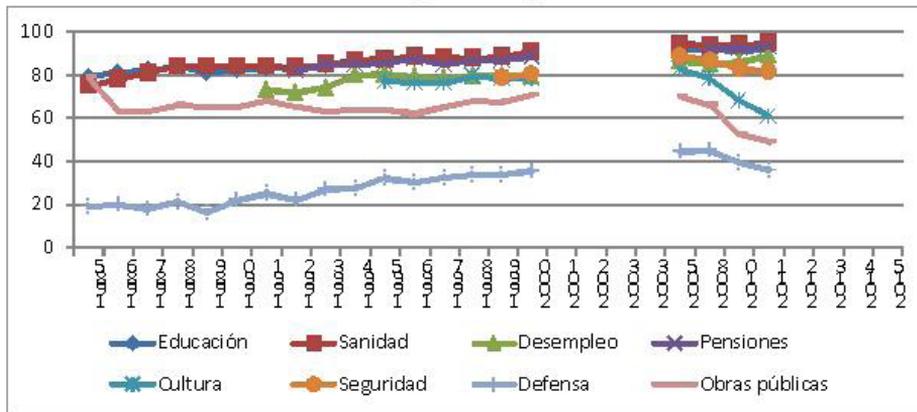
**Gráfico 4. Ciudadanos que opinan que los recursos gastados en distintas políticas sociales son "muy pocos" (2005 a 2015)**



Fuente: elaboración propia con datos del CIS. Pregunta: Como Ud. sabe, las distintas administraciones públicas destinan el dinero que en España pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y prestaciones de las que venimos hablando. Dígame, por favor, si cree que dedican demasiados, los justos o muy pocos recursos a cada uno de los servicios que le voy a mencionar.

La misma pauta puede encontrarse en lo que se refiere cuando se pregunta a los ciudadanos por su opinión a favor o en contra de los recortes. Como ya explicamos en un artículo anterior (Calzada y del Pino, 2015), la crisis ha tenido un efecto distinto en relación con las actitudes hacia el recorte según el sector de política. En el caso de las políticas sociales, el porcentaje de contrarios al recorte era muy elevado y creciente: desde el 70 por ciento en 1985 hasta alcanzar su máximo en 2011, último dato disponible ya que el CIS no ha vuelto a preguntar por este tema a pesar de nuestra petición expresa. El porcentaje de contrarios al recorte en sanidad, pensiones, educación y desempleo llegó entonces a alcanzar el 95, 94, 94 y 91 respectivamente.

**Gráfico 5. Ciudadanos en contra del recorte en varias políticas públicas (1985 a 2015) Porcentaje**



Fuente: elaboración propia con datos del CIS. Pregunta: Suponiendo que las Administraciones se vieran obligadas a gastar menos en políticas y servicios públicos, dígame, si estaría a favor o en contra de que se gastara menos en... (Porcentajes sobre el total de los entrevistados)

Sin embargo, respecto a las otras políticas analizadas, el grupo de quienes se oponían a los recortes disminuyó entre 2008 y 2011. En seguridad ciudadana, cultura, infraestructuras y defensa se pasó del 87, 78, 66 y 45 por ciento respectivamente en 2008 al 82, 61, 48 y 36 por ciento en 2011. Como ya explicamos en Calzada y Del Pino (2015), solo la austeridad parece haber hecho retroceder de nuevo a estos partidarios del recorte. En 2012, los ciudadanos contrarios al recorte en seguridad se estabilizaron respecto a 2011, se incrementaron los contrarios al recorte en el caso de la cultura hasta trece puntos, cinco en obras públicas, y solo continúan disminuyendo en defensa.

### 3.2. Actitudes hacia los impuestos

Las preferencias sobre los impuestos han sufrido también el impacto de la crisis. Desde 2008, el CIS ofrece una escala de respuesta entre 0 (“mejorar los servicios públicos y prestaciones sociales aunque haya que pagar más impuestos”), y 10 (“pagar menos impuestos aunque eso signifique reducir servicios y prestaciones”). Si en 2008 había un 42 por ciento de partidarios de las opciones más cercanas a “pagar más” (posiciones entre 0 y 3), en 2015 este porcentaje se sitúa en el 31 por ciento, habiéndose recuperado desde el 23 por ciento en que llegó a estar en 2013 (Tabla 3). A lo largo de este tiempo, el porcentaje de personas partidarias de reducir impuestos (posiciones 7 a 10 de la escala) no ha superado el 20 por ciento, habiéndose reducido en 2015 hasta un porcentaje similar al comienzo de la misma, alrededor del 12 por ciento. En este periodo, entre un 40 y un 50 por ciento se ha ubicado en posiciones intermedias (4-6).

**Tabla 3.** Partidarios de pagar más y menos impuestos (2008 a 2015)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Deberían mejorarse los servicios públicos y prestaciones sociales aunque haya que pagar más impuestos (0-3)	42,1	35,9	26,7	23,5	27,1	27,0	27,1	31,0
(4-6)	39,8	39,3	43,7	51,4	46,4	47,6	49,6	44,8
Habría que pagar menos impuestos aunque eso signifique reducir servicios públicos y prestaciones sociales (7-10)	11,6	19,6	19,0	18,0	17,8	17,9	13,8	12,4
NS/NC	6,5	5,2	10,6	7,1	8,6	7,8	10,5	7,5

Fuente: elaboración propia con datos del CIS.

Especialmente desde 2010 se incrementó la sospecha sobre el sistema fiscal, llegando a alcanzar casi el 90 por ciento los ciudadanos que estimaban que los impuestos no se cobran con justicia (en 2015 este porcentaje es del 87 por ciento), mientras que un 65 por ciento pensaba que recibía del Estado menos de lo que pagan en impuestos (en 2015 este porcentaje es del 62 por ciento). La percepción de corrupción también se ha incrementado, apareciendo como uno de los principales problemas de nuestro país. Como ya explicamos en un artículo anterior (Calzada y Del Pino, 2011), gracias a la información extraída de grupos de discusión sabemos que los ciudadanos son conscientes de la necesidad de pagar impuestos, pero piensan que se puede mejorar la gestión tanto de los impuestos como de los servicios públicos. Finalmente, el mayor nivel educativo y la ideología de izquierdas disminuyen la preferencia por bajadas

de impuestos. Asimismo, en algunas CCAA, los ciudadanos se muestran más reacios que en otras a la subida de impuestos (Calzada y Del Pino, 2013).

## **4. ACTITUDES HACIA LA REDISTRIBUCIÓN ENTRE DIFERENTES COLECTIVOS**

### **4.1. Actitudes hacia la redistribución entre diferentes colectivos de ciudadanos**

En las secciones anteriores hemos mostrado las preguntas que se utilizan habitualmente para medir las actitudes hacia la redistribución. Los resultados son sin duda interesantes, pero su interpretación requiere de una cautela no siempre presente en la literatura sobre el tema. Aunque encontramos análisis bastante sofisticados comparando las opiniones de quienes viven en distintos países (Svallfors, 1997; Linos & West, 2003; Jaeger, 2006;) y/o analizando los factores que determinan el apoyo a la redistribución (Edlund, 1999; Svallfors, 1999; Jaime Castillo y Marqués Perales, 2014), pocas veces se trata de entender el marco mental desde el que los ciudadanos apoyan o rechazan la intervención igualadora del Estado.

Interpretar correctamente las respuestas de los encuestados es más complejo de lo que parece. Tomemos el mapa que aparece en el Gráfico 2 y que refleja los resultados de una pregunta sobre igualitarismo (dígame su grado de acuerdo con la siguiente frase "Para que una sociedad sea justa las diferencias entre los niveles de vida de la gente deberían ser pequeñas"). Es evidente que se pregunta sobre la deseabilidad de la desigualdad pero, ¿a quién tienen en mente los encuestados cuando responden? ¿Quién es 'la gente' que debería tener un nivel de vida más o menos parecido? Además, aunque en un epígrafe anterior hemos visto que hay un fuerte apoyo a las políticas sociales, en realidad las políticas por las que hemos preguntado son intervenciones públicas que se destinan a la mayoría social. Mientras los ciudadanos apoyan las políticas sociales universales, es posible que se muestren más reticentes a políticas que solo son para unos pocos. Ahondar en esta cuestión es clave para entender el grado de apoyo popular a las políticas redistributivas y prever reacciones ante nuevas medidas.

Los ejes que explican la desigualdad de rentas (o de nivel de vida) son variados. Por un lado deben considerarse los atributos que sirven para definir clases sociales: el nivel educativo y la ocupación, fundamentalmente. Ambas cuestiones están relacionadas con los ingresos y sirven para clasificar a los individuos en clases sociales. ¿Es esto lo que tienen los ciudadanos en mente cuando pien-

san en la igualdad social y en los instrumentos del estado para promoverla? La literatura previa parece asumir que así es, y tiende a interpretar las respuestas de los ciudadanos en el marco de las desigualdades entre clases sociales.

Pero lo cierto es que las desigualdades en el nivel de vida de los ciudadanos no se reducen a la existencia de clases sociales. Otras cuestiones entran en juego, como por ejemplo la edad o la nacionalidad. Respecto a la nacionalidad, el último módulo de la Encuesta de Condiciones de Vida (2014) muestra que la renta disponible de los españoles es casi el doble que la de quienes provienen de fuera de la UE, y en torno a un tercio más alta que la de los inmigrantes comunitarios. La tasa de riesgo de pobreza (sin imputar el alquiler) era del 18 % para los españoles; del 36 % para los inmigrantes de la UE y del 55 % para los residentes en España del resto del mundo. Las diferencias en el riesgo de pobreza son incluso más fuertes con alquiler imputado: 15 % para los españoles frente al 58 % de los residentes en España que vienen de países no europeos<sup>3</sup>.

En parte por su mayor fragilidad económica, la presencia de población inmigrante se ha visto desde hace tiempo como uno de los principales retos a los que el Modelo Social Europeo debía hacer frente (Alesina y Glaeser, 2004). Una de las preocupaciones es que la diversidad étnica disminuya el sentimiento de solidaridad nacional que, en teoría, sustenta el carácter redistribuidor de los Estados modernos (Kymlicka, 2008). Llevándolo al aspecto puramente económico, se teme que los 'nativos' se vuelvan reacios a financiar unas políticas redistributivas que no solo les benefician a ellos, sino también a los llegados de otros países.

Hasta la fecha, los estudios empíricos del posible conflicto entre la inmigración y el Estado del Bienestar arrojan resultados poco alarmantes: la tasa de inmigración en cada país no tiene relación con la extensión del miedo a que los inmigrantes se aprovechen del sistema (Halvorsen, 2007); ni tampoco con el porcentaje de población que desearía excluir a los inmigrantes del acceso a los servicios y prestaciones públicas (Reeskens y van Oorschot, 2012). Pero aunque se descarta la existencia de una relación directa entre la llegada de inmigrantes y el debilitamiento de la voluntad redistribuidora de los 'nativos', estos trabajos ponen de manifiesto la heterogeneidad de esta relación entre países y muestran que, para sectores sustanciales de la población europea, la igualdad no pasa por redistribuir hacia los inmigrantes (Senik, Stichnoth & Van der Straeten, 2009). Cabe preguntarse si cuando los españoles piden mayor igualdad de rentas están pensando en igualar a los españoles entre sí, o también en reducir la brecha que separa las condiciones de vida de quienes han nacido en otro país. Hay también diferencias claras en función de la cohorte de

3 Datos de [www.ine.es](http://www.ine.es), acceso el 12 de mayo de 2016.

edad, algo quizás menos estudiado, y la percepción de la justicia o injusticia de este tipo de desigualdad también difiere entre países (Sabbagh y Vanhuysse, 2010). En países con sistemas de pensiones públicas débiles, la pobreza entre los mayores suele ser la principal preocupación. En España, la combinación de un sistema de pensiones con altas tasas de reemplazo (al menos para quienes han contribuido suficiente) con la inexistencia de políticas de infancia y familia, y la mayor incidencia del desempleo entre los jóvenes, hace que sean los mayores de 65 quienes salen ganando. Los años de crisis no han hecho sino agrandar la brecha entre generaciones, aumentando la tasa de pobreza entre los niños, reduciéndola entre los jubilados y, en general, empeorando la situación de los jóvenes adultos mientras se mantenía estable la de los mayores de 65 años (Marí-Klose, Escapa y Marí-Klose, 2016).

El debate sobre la necesidad de que el Estado equilibre esta situación con políticas que favorezcan a los jóvenes, aun a costa de aquellas que benefician a los mayores, está abierto. Falta por saber si estas políticas lograrían apoyo ciudadano. Es posible que el igualitarismo de los españoles no se extienda a las desigualdades entre generaciones, en la idea de que pasar dificultades durante la juventud (o primeros años de la vida adulta) forma parte del curso 'natural' de la vida.

Para ahondar en estas cuestiones, las autoras de este artículo, junto con otros investigadores, diseñaron un experimento que se incluyó en una encuesta representativa de la población española llevada a cabo en septiembre de 2014<sup>4</sup>. Los experimentos en encuestas (*survey experiments*) buscan combinar el poder generalizador de la encuesta con el potencial de los experimentos para establecer relaciones de causalidad. El diseño más simple y utilizado consiste en introducir alguna variación en el enunciado de una de las preguntas, aplicar la pregunta con variación a una parte de la muestra y comparar las respuestas de quienes recibieron la pregunta estándar con aquellos que recibieron la pregunta modificada. Así se intenta ver si esas pequeñas modificaciones tienen efecto sobre las respuestas. En terminología experimental, la modificación hecha en el enunciado de la pregunta es el "tratamiento"; los encuestados que reciben la pregunta modificada son el "grupo experimental" y los que reciben la pregunta estándar constituyen el "grupo de control". El tratamiento tiene

4 La encuesta telefónica de 2000 casos, estratificada por provincias, con cuotas de sexo y edad se llevó a cabo en el marco del proyecto de investigación: "Pensions and Education: Combined Effects on inter and intragenerational redistribution", financiado por La Fundación La Caixa y la Fundación General del CSIC. La investigadora principal fue Concepció Patxot (UB). El equipo del CSIC que diseñó la encuesta estuvo liderado por P. Marí Klose y compuesto además por FJ. Moreno Fuentes e I. Calzada.

efecto si las respuestas dadas por el grupo experimental y por el grupo de control son distintas.

En nuestro caso, el generoso tamaño muestral (2000 casos) permitió un diseño más complejo. Dividimos la muestra de manera aleatoria en cinco grupos: uno al que le presentaríamos una pregunta “típica” sobre redistribución, y que funcionaría como grupo de control; y otros cuatro grupos que recibirían la misma pregunta con modificaciones. La *pregunta de base* es la misma que se incluye en todas las rondas de la ESS y cuyos resultados hemos mostrado el Gráfico 2, salvo porque en lugar de preguntar por ‘la gente’, preguntamos por ‘los ciudadanos’. Esta pregunta base fue: “Dígame por favor su grado de acuerdo con la siguiente frase: “Para que una sociedad sea justa, las diferencias en el nivel de vida de los ciudadanos han de ser pequeñas”.

Esta pregunta base se hizo a un quinto de la muestra (400 casos). El resto (1600 casos) se dividió aleatoriamente en cuatro grupos (A, B, C, D) y a cada uno de ellos se les hizo la pregunta base con una modificación:

GRUPO A: “Dígame por favor su grado de acuerdo con la siguiente frase: “Para que una sociedad sea justa, las diferencias en el nivel de vida de jóvenes y adultos han de ser pequeñas”.

GRUPO B: “Dígame por favor su grado de acuerdo con la siguiente frase: “Para que una sociedad sea justa, las diferencias en el nivel de vida de jóvenes y ancianos han de ser pequeñas”.

GRUPO C: “Dígame por favor su grado de acuerdo con la siguiente frase: “Para que una sociedad sea justa, las diferencias en el nivel de vida de ricos y pobres han de ser pequeñas”.

GRUPO D: “Dígame por favor su grado de acuerdo con la siguiente frase: “Para que una sociedad sea justa, las diferencias en el nivel de vida de inmigrantes y no inmigrantes han de ser pequeñas”.

La escala de respuesta es la misma para todas las opciones: Muy de acuerdo; De acuerdo; En desacuerdo; Muy en desacuerdo. La respuesta “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” no se leía pero sí era recogida por los encuestadores cuando aparecería de forma espontánea.

Hay que destacar que a cada grupo sólo se le presentaba una de las preguntas e ignoraba que el resto era expuesto a una opción ligeramente distinta. Esta forma de proceder arroja resultados más fiables que la típica batería de preguntas donde los entrevistados responden, una tras otra, a las distintas cuestiones sobre un mismo tema. Sabemos que en una batería de preguntas los entrevistados tratan de mantener una cierta coherencia, por lo que todas las respuestas tienden a estar condicionadas por lo que se contestó a los pri-

meros ítems. En nuestro caso las respuestas no están condicionadas, ya que los entrevistados solo respondieron a la pregunta que les tocaba. Al comparar las respuestas de los distintos grupos podemos estar seguros que cualquier variación se debe, exclusivamente, a las diferencias en el enunciado. Es decir, las diferencias en el grado de igualitarismo de los distintos grupos solo pueden deberse a que hemos hecho referencia a distintos ejes de desigualdad. La Tabla 4 muestra los resultados de este experimento.

**Tabla 4.** Grado de acuerdo con “Para que una sociedad sea justa, las diferencias en el nivel de vida de... han de ser pequeñas”, 2014, porcentajes.

	De los ciudadanos	De jóvenes y adultos	De jóvenes y ancianos	De ricos y pobres	De inmigrantes y no inmigrantes
Muy de acuerdo	37,8	21,9	22,0	44,0	30,9
De acuerdo	42,2	52,5	53,0	42,3	43,7
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4,7	5,2	7,3	3,6	7,9
En desacuerdo	9,4	12,7	11,4	7,3	10,4
Muy en desacuerdo	4,0	2,5	2,9	1,9	3,0
Ns/nc	2,0	5,2	3,4	1,0	4,1
N (columna)	100 (N=405)	100 (N=402)	100 (N=413)	100 (N=414)	100 (N=366)
Muy de acuerdo + de acuerdo	80	74	75	86	75

Fuente: elaboración propia con datos del proyecto “Pensions and Education: Combined Effects on inter and intragenerational redistribution”. Pregunta: “Dígame por favor su grado de acuerdo con la siguiente frase: “Para que una sociedad sea justa, las diferencias en el nivel de vida de... han de ser pequeñas”.

Por un lado, es evidente que una gran mayoría de los encuestados (residentes en España mayores de 16 años) cree que una sociedad justa se caracteriza por tener pocas diferencias en el nivel de vida de la gente y que esto implica que haya pocas diferencias entre grupos económicos, entre grupos de edad y también entre inmigrantes y ‘nativos’. Independientemente de los grupos por los que se pregunte, entre un 74 y un 86 por ciento dice que las diferencias entre ellos deben ser pequeñas. Por otro lado, sobre la base de este amplio consenso encontramos que algunos ejes de desigualdad parecen más injustos que otros. El conflicto de intereses entre clases sociales se vive como el menos aceptable: un 44 por ciento están “muy de acuerdo” con que una sociedad justa no debe permitir grandes diferencias entre “ricos y pobres”. Curiosamente, y

en contra de las preocupaciones de los estudiosos del Estado del Bienestar, la desigualdad entre nativos e inmigrantes no es la más aceptable a ojos de los ciudadanos, sino la desigualdad entre generaciones: solo un 22 por ciento de los encuestados está “muy de acuerdo” con que una sociedad justa debe igualar el nivel de vida de “jóvenes y adultos” o de “jóvenes y ancianos”, frente a un 31 por ciento que piensa que no debe haber diferencias en el nivel de vida de “inmigrantes y no inmigrantes”.

Si sumamos los porcentajes que han respondido “muy de acuerdo” y “de acuerdo”, tenemos que las diferencias menos aceptables son aquellas entre “ricos y pobres”, seguidas por las diferencias entre “ciudadanos”. Que haya diferencias entre “inmigrantes y no inmigrantes” o entre “jóvenes y adultos”/“jóvenes y ancianos” arroja un rechazo similar, en torno al 75 por ciento.

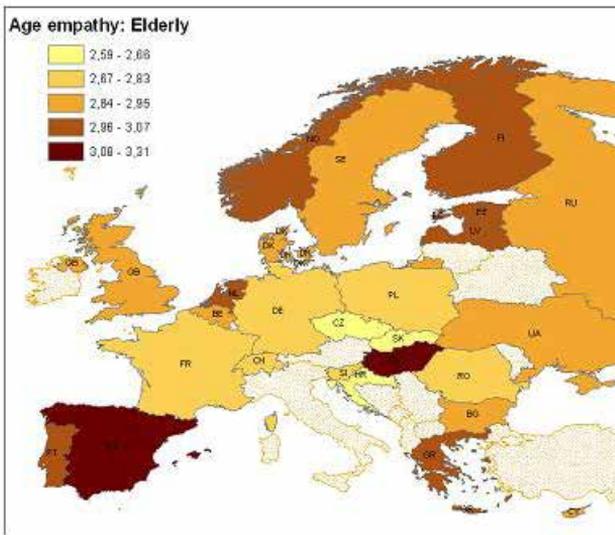
## 4.2. Una perspectiva generacional de las actitudes hacia la redistribución

Aunque los españoles manejan una idea bastante inclusiva de la igualdad, ésta tiene más que ver con redistribuir entre grupos económicos que entre generaciones. Sabemos que los españoles son especialmente sensibles a las necesidades de los más mayores. Así que esta mayor tolerancia hacia las diferencias entre jóvenes y mayores supone, en realidad, aceptar que los jóvenes tengan menos ayudas estatales que los mayores. Los españoles acostumbran a situar a los “ancianos” o a los “mayores que viven solos” como los colectivos que prioritariamente merecen la ayuda, relegando a un segundo lugar las necesidades de los jóvenes, las familias con niños o los inmigrantes (Arriba, Calzada y Del Pino, 2005).

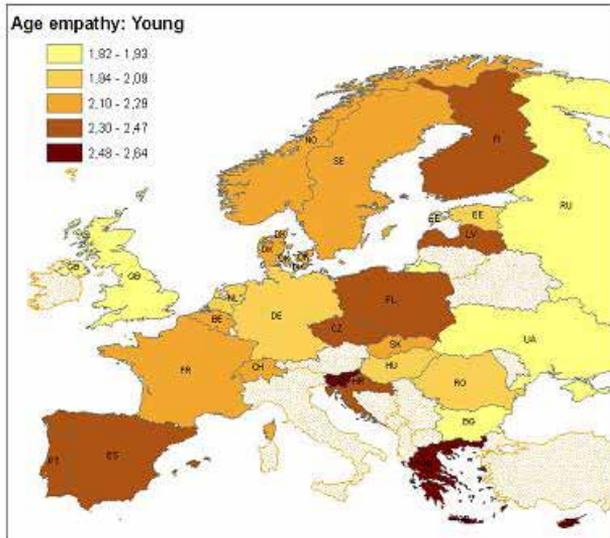
Los Gráficos 6 y 7 muestran la distribución a lo largo de Europa de dos indicadores sobre cómo se percibe en cada país a los jóvenes por un lado y a los mayores por otro. Los gráficos están basados en datos de la ESS de 2008, único año en el que se incluyó un módulo sobre las actitudes hacia distintos grupos de edad. En concreto, se introdujeron dos baterías interesantes por su carácter socio-trópico, es decir, por preguntar a los entrevistados cuál creen ellos que es la opinión mayoritaria del país donde viven sobre los jóvenes y sobre los ancianos. La primera pregunta se formulaba así: “Por favor dígame ¿en qué medida es probable que la mayoría de la gente en España perciba a los que están en los 20 ...como gente amistosa? ...como gente competente? ...como gente con principios? ...con respeto?”. La batería de preguntas sobre lo que los españoles piensan de los mayores se formulaba idénticamente: “Ahora, piense en las personas de más de 70 años. Utilizando la misma tarjeta dígame, por favor, ¿en qué medida es probable que la mayoría de la gente en España perciba a las personas de más de 70...como gente amistosa? ...como gente competente? ...como gente con principios? ...con respeto?”.

Para todos los ítems, la escala de respuesta iba de 0- “No es nada probable que los perciban así”, a 4- “Es muy probable que los perciban así”. Hemos calculado la media ponderada de las respuestas a estas preguntas y elaborado dos gráficos para ver cómo se posicionan los europeos frente a estos dos grupos de edad. El procedimiento para clasificar a los países en grupos (identificados por colores) es el mismo que usamos para elaborar el gráfico sobre igualitarismo en Europa (el método de cortes naturales de Jenks). Los distintos colores que aparecen muestran diferencias estadísticamente significativas en las respuestas de los residentes de cada país. Un tono más oscuro indica una mayor extensión de creencias positivas acerca de los mayores (Gráfico 6) o de los jóvenes (Gráfico 7).

**Gráfico 6. Actitudes hacia los mayores en Europa.**



Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Social Europea (2008) y el programa ArcGIS. Las puntuaciones de cada país van de 1 (muy poca gente cree que la mayoría del país tiene una percepción positiva de los mayores) a 4 (mucha gente cree que en su país la mayoría tiene una percepción positiva de los mayores).

**Gráfico 7. Actitudes hacia los jóvenes en Europa.**

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Social Europea (2008) y el programa ArcGIS. Las puntuaciones de cada país van de 1 (muy poca gente cree que la mayoría del país tiene una percepción positiva de los jóvenes) a 4 (mucha gente cree que en su país la mayoría tiene una percepción positiva de los jóvenes).

España destaca del resto de Europa en la extensión de valores positivos hacia los mayores (solo equiparada con Hungría). En nuestro país, la mayoría piensa que en España los mayores de 70 años son vistos como gente amistosa, competente y con principios; y que, por tanto, existe una actitud general de respeto ante ellos. Sin embargo, no destacamos tanto cuando se trata de la extensión de creencias favorables a los jóvenes.

La alta consideración hacia los mayores puede tener efectos sobre las preferencias redistribuidoras de los españoles y debe ser tenida en cuenta antes de realizar cualquier reorientación del gasto público. La evolución de las actitudes hacia las pensiones públicas es un buen ejemplo: pese a la dureza con que la crisis ha afectado a los jóvenes, el apoyo a las pensiones públicas y el deseo de que el Estado gaste más en esta partida sigue siendo elevadísimo (véase el apartado III).

Con todo, la extensión de estos valores pro-mayores no implica una ausencia de reflexión sobre las necesidades de otros grupos. En el cuestionario que diseñamos para el proyecto "Pensions and Education", tratamos de ver hasta dónde llega la preferencia por ayudar a los mayores. Elaboramos dos preguntas que ponían a los entrevistados ante la siguiente situación: elegir entre gastar en beneficio de los jóvenes o hacerlo en beneficio de los mayores. Enfrentados

ante la disyuntiva entre “gastar en educación o en pensiones”; o entre “construir centros de día para mayores o guarderías”, los encuestados se quejaban (e incluso se irritaban) de la complejidad de tal decisión. Para salvar este obstáculo decidimos prevenirles en el propio enunciado de la pregunta de que se les iba a hacer una pregunta complicada, lo que prácticamente eliminó las quejas.

Formulamos la primera pregunta así: “Ahora le preguntaré sobre las cosas que el Gobierno puede hacer para ayudar a la gente. Le voy a presentar una situación complicada. Imagine que el Gobierno debe decidir si en 2014 destina dinero a mejorar la educación o a mejorar las pensiones. ¿Usted que preferiría?”; la segunda, así: “Y si el Gobierno tuviera que elegir entre destinar dinero para crear más guarderías, o destinar ese dinero en crear nuevos centros de día para mayores, ¿usted qué preferiría?”. Solo se ofrecían dos opciones de respuesta: gastar más en educación o gastar más en pensiones, para la primera pregunta; construir centros de día para mayores o construir guarderías, para la segunda pregunta. De forma espontánea, muchos encuestados dijeron “gastar lo mismo en las dos partidas”, por lo que se codificó como respuesta.

**Tabla 5.** Los ciudadanos ante la disyuntiva de gastar más en educación o en pensiones, 2014. Porcentajes.

Destinar el dinero a mejorar la educación	47
Destinar el dinero a mejorar las pensiones	13
Por igual (no leer)	38
Ns/Nc	2
Total (N)	100 (2000)

Fuente: elaboración propia con datos del proyecto “Pensions and Education: Combined Effects on inter and intragenerational redistribution”. Pregunta: “Ahora le preguntaré sobre las cosas que el Gobierno puede hacer para ayudar a la gente. Le voy a presentar una situación complicada. Imagine que el Gobierno debe decidir si en 2014 destina dinero a mejorar la educación o a mejorar las pensiones. ¿Usted que preferiría?”.

En la Tabla 5 podemos ver que, pese a la importancia otorgada a las necesidades de los mayores, en 2014 la mayoría preferiría gastar más en educación (47 por ciento) que hacerlo en pensiones (13 por ciento), aunque una parte importante de los encuestados se negaron a escoger entre ambas y espontáneamente respondieron que debía gastarse en ambas partidas por igual (38 por ciento). Los valores etarios favorables a los grupos de más edad y la consideración de que se gasta poco en pensiones no deben por tanto interpretarse como una preferencia ciega por las políticas que favorecen a los mayores. Una cosa es priorizar a un grupo social y otra olvidarse del resto, y en este caso las necesidades educativas de los niños no sólo son tenidas en cuenta sino

puestas en primer lugar. Es posible que las movilizaciones a favor de la escuela pública, que tuvieron lugar al comenzar los recortes, sirvieran para visibilizar los problemas de la educación.

En la Tabla 6 se muestran los resultados de la difícil elección entre guarderías y centros de día para mayores. La balanza se inclina hacia la protección de la tercera edad. El 38 por ciento de los encuestados preferían construir más centros de día; y solo un 19 por ciento escogió las guarderías. Aun así, la respuesta que más apoyos sumó fue la de gastar por igual en ambas cosas (40 por ciento).

**Tabla 6.** Los ciudadanos ante la disyuntiva de gastar más en centros de día o en guarderías, 2014. Porcentajes.

Destinar el dinero a crear más guarderías	19
Destinar el dinero a crear más centros de día para mayores	38
Por igual (no leer)	40
Ns/Nc	3
Total (N)	100 (2000)

Fuente: elaboración propia con datos del proyecto "Pensions and Education: Combined Effects on inter and intragenerational redistribution". Pregunta: "Y si el Gobierno tuviera que elegir entre destinar dinero para crear más guarderías, o destinar ese dinero en crear nuevos centros de día para mayores, ¿usted qué preferiría?".

Cuando miramos las respuestas por grupos de edad vemos que hay poco auto-interés y bastante solidaridad inter-generacional o, lo que es lo mismo, una postura favorable a redistribuir hacia quien se percibe como más necesitado (Tablas 7 y 8). Aunque los jóvenes son especialmente partidarios de que se gaste en educación en lugar de en pensiones, es de destacar que también son los jóvenes quienes en mayor medida apuestan por crear centros de día para mayores en lugar de guarderías. En la pregunta sobre "educación o pensiones" los jóvenes son más partidarios de invertir en educación y a medida que avanza la edad encontramos más partidarios de gastar por igual en ambas partidas. El alto porcentaje de entrevistados que mencionaron espontáneamente su deseo de gastar en ambas partidas, pese a que esta opción no se leía y venía desincentivada por el propio enunciado de la pregunta, es también un indicativo del escaso conflicto generacional en la distribución de recursos por parte del Estado.

**Tabla 7.** Los ciudadanos ante la disyuntiva de gastar más en educación o en pensiones, por grupos de edad, 2014. Porcentajes.

	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	64+	Total
Educación	69	57	51	47	38	39	48
Pensiones	6	10	16	14	14	14	13
Por igual (espontánea)	25	33	33	39	48	47	39
Total	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia con datos del proyecto "Pensions and Education: Combined Effects on inter and intragenerational redistribution". Pregunta: "Ahora le preguntaré sobre las cosas que el Gobierno puede hacer para ayudar a la gente. Le voy a presentar una situación complicada. Imagine que el Gobierno debe decidir si en 2014 destina dinero a mejorar la educación o a mejorar las pensiones. ¿Usted que preferiría?"

**Tabla 8.** Los ciudadanos ante la disyuntiva de gastar más en centros de día o en guarderías, por grupos de edad, 2014. Porcentajes.

	16-24	25-34	35-44	45-54	55-64	64+	Total
Guarderías	32	23	19	16	15	18	19
Centros de día	42	41	47	46	32	28	39
por igual (espontánea)	26	36	34	37	53	54	42
Total	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia con datos del proyecto "Pensions and Education: Combined Effects on inter and intragenerational redistribution". Pregunta: "Y si el Gobierno tuviera que elegir entre destinar dinero para crear más guarderías, o destinar ese dinero en crear nuevos centros de día para mayores, ¿usted qué preferiría?"

Respecto a la elección entre construir centros de día para mayores o guarderías, hay mucha más gente que opta por los primeros (39 por ciento) que por las segundas (19 por ciento) y esta preferencia se da en todos los grupos de edad. Son los encuestados de más edad quienes en menor medida apoyan la construcción de centros de día (un 28 de los mayores de 64 años, frente a un 42 por ciento de los menores de 24). Los más mayores se decantan especialmente por destinar parte del dinero a guarderías y parte a centros de día, lo que vuelve a indicar que el conflicto entre generaciones tiene escaso reflejo en temas de política social.

Si ponemos en relación los datos que acabamos de presentar con nuestro pequeño experimento sobre la idea de redistribución de los españoles, el panorama es consistente. La concepción inclusiva de igualdad, que entiende que las diferencias en el nivel de vida de quienes viven en España han de ser pequeñas, ya se trate de ricos y pobres, jóvenes y mayores, o inmigrantes y nativos, se acompañan de preferencias sobre la acción redistribuidora del Estado con un marcado componente altruista. Por supuesto, en esta última sección solo hemos podido abordar el tema de la redistribución entre grupos de edad, un ámbito en el que parece primar la solidaridad. Queda por ver si, enfrentados a decisiones que impliquen favorecer a los inmigrantes o a los nativos, los españoles se muestran tan altruistas.

## 5. CONCLUSIONES

A lo largo del tiempo, antes y durante la crisis, una mayoría de los ciudadanos se muestran favorables a la intervención del Estado para igualar las condiciones de vida de quienes viven dentro del territorio. Existe mucha coherencia en el discurso de los españoles sobre este tema, lo que sugiere que estamos ante un posicionamiento estable y reflexionado. La ciudadanía apoya la idea de redistribución y abraza valores de corte igualitario, afirmando que la justicia de una sociedad pasa por que haya pocas diferencias en el nivel de vida de la gente.

Además, los españoles respaldan especialmente las políticas que tienen un mayor potencial redistributivo. La crisis debilitó temporalmente el apoyo a otras políticas públicas tal y como anticipa la literatura, pero esto no ocurrió en relación a las políticas sociales. De hecho, se ha incrementado el respaldo a las políticas sociales sin que haya grandes diferencias entre ellas. Aun así, las políticas sociales por las que hemos preguntado benefician a una amplia mayoría social en el caso de España. Debemos recordar aquí el hecho de que carecemos de preguntas sobre políticas sociales focalizadas específicamente en los ciudadanos más desfavorecidos (por ejemplo, sobre las rentas mínimas). Los ciudadanos se muestran contrariados con la existencia de diferencias en el nivel de vida de la gente en general, con las diferencias entre jóvenes y mayores, entre inmigrantes y nacionales y, especialmente, con las diferencias por clase social. Eso nos haría suponer que también van a apoyar políticas específicas para personas en situación de necesidad. Sin embargo, necesitamos más información sobre este aspecto.

Todos los datos que hemos presentado indican la existencia de un sólido consenso igualitario sobre el que se pueden llevar a cabo distintas políticas redistribuidoras. Pero ningún gobierno debería confiar en la eterna solidez de este consenso, que puede quebrarse si, debido a la mala gestión, el sistema

fiscal deja de ser creíble para los ciudadanos. Los españoles han sido más bien proclives a pagar impuestos. Sin embargo, el contexto de crisis y, quizás fundamentalmente, la combinación de decisiones cuestionables (la amnistía fiscal) con el descubrimiento de numerosos casos de corrupción, ha hecho que se muestren más reticentes que antes a pagar impuestos. Aunque parece que la sociedad es claramente partidaria de reducir la desigualdad, el otro reto al que hoy se enfrenta un gobierno que pretenda aplicar nuevas políticas redistributivas es recuperar la confianza de los españoles en la justicia del sistema fiscal.

## 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alesina, A. y Glaeser, E. (2004). *Fighting poverty in the US and Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- Andersen, J. G., Pettersen, P. A., Svallfors, S. y Uusitalo, H. (1999). "The Legitimacy of the Nordic Welfare States: Trends, Variations and Cleavages" en Kautto, M, Heikkilä, M, Hvinden, B, Marklund, S y Plough, N (eds.) *Nordic Social Policy. Changing Welfare States*. Londres: Routledge. 235-261.
- Arriba, A. Calzada, I. y del Pino, E. (2006). *Los ciudadanos y el EB en España (1985-2005)*, Serie Opiniones y Actitudes, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Madrid.
- Bartels, Larry M. (2005). "Homer Gets a Tax Cut: Inequality and Public Policy in the American Mind." *Perspectives on Politics* 3(1): 15-31 .
- Blekesaune, M. y Jill, Q. (2003). "Public attitudes toward welfare state policies. A comparative analysis of 24 nations" *European Sociological Review*, 19: 415-427.
- Brooks C. and Manza, J. (2013) *'A Broken Public? Responses to the Great Recession?'* *American Sociological Review* 78(5): 727-748.
- Calzada, I. y del Pino, E. (2011). "Are Spaniards different? European convergence and regional divergence in the evaluation of Welfare State". En Ana M. Guillén y Margarita León, *The Spanish Welfare State in the European Context*. Londres: Ashgate. 139-164.
- Calzada, I. y Del Pino, E. (2015) "Preferencias sobre el Estado de Bienestar y satisfacción con las políticas sociales en el Estado Autonómico (1985-2013). Situación Social de España 2015. Madrid: CIS. 1081-1104.
- Clarke, HD., Borges, W., Stewart, MC., Sanders, D. y Whiteley, P. (2013) 'The Politics of Austerity: Modeling British Attitudes Towards Public Spending Cuts', en N. Schofield, G. Caballero, D. Kselman (eds.) *Advances in Political Economy: Institutions, Modeling and Empirical Analysis*, Chapter: The Politics of Austerity: Modeling British Attitudes Towards Public Spending Cuts, Publisher: Springer. 265-287.

- Dallinger, U. (2010). "Public support for redistribution: what explains cross-national differences?" *Journal of European Social Policy*, 20(4): 333-349.
- Edlund, Jonas (1999). "Trust in Government and Welfare Regimes: Attitudes to Redistribution and Financial Cheating in the USA and Norway", *European Journal of Political Research*, 35 (3): 341-370.
- Finieras H. y Ringdal, K. (2012). "Economic globalization, personal risks and the demand for comprehensive welfare state" en H. Ervasti, J. Goul Andersen, T. Fridberg y K. Ringdal (eds.) *The Future of the Welfare State. Social Policy Attitudes and Social Capital in Europe*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Forma, P. (2002). "Does economic hardship lead to polarisation of opinions towards the Welfare State?" *Journal of Social Policy*, 31(2): 187-206.
- Franko, William, Tolbert, Caroline J., y Witko, Christopher (2013). *Inequality, Self-Interest, and Public Support for "Robin Hood" Tax Policies*, *Political Research Quarterly* 66(4) 923 –937.
- Halvorsen, K. (2007). Legitimacy of welfare states in transition from homogeneity to multiculturalism: a matter of trust. In S. Mau & B. Veghte (Eds.), *Social justice, legitimacy and the welfare state*. Aldershot: Ashgate. 239–259.
- Jaime Castillo, A. y Marqués Perales, I. (2014). Beliefs about Social Fluidity and Preferences for Social Policies. *Journal of Social Policy*, 43: 615-633.
- Kymlicka, W. (2008). Multiculturalism, social justice and the welfare state, en G. Craig, T. Burchardt & D. Gordon (Eds.), *Social justice and public policy*. Bristol: Policy Press. 53-76.
- Linos, K. y West, M. (2003). 'Self-interest, social beliefs, and attitudes to redistribution: re-addressing the issue of cross-national variation', *European Sociological Review*, 19: 4, 393–409.
- McCall, L. (2013). *The Undeserving Rich: American Beliefs About Inequality, Opportunity, and Redistribution*. New York: Cambridge University Press.
- Taylor-Gooby, P. (2010): "Security, equality and opportunity: attitudes and the sustainability of social protection", *Journal of European Social Policy*, 21, 2, 150-63.
- Mads Meier, J. (2006). "Welfare Regimes and Attitudes Towards Redistribution: The Regime Hypothesis Revisited", *European Sociological Review* 22(2): 157-170.
- Marí-Klose, P. Escapa, S. y Marí Klose, M. (2016) 'Crisis y Pobreza infantil en España', *Revista del Tercer Sector*, 32, 141-169.
- Reeskens, T., y van Oorschot, W. (2012). Disentangling the 'New Liberal Dilemma': On the relation between general welfare redistribution preferences and

- welfare chauvinism. *International Journal of Comparative Sociology*, 53, 120–139.
- Sabbagh, C. y Vanhuysse, P. (2010). Intergenerational Justice Perceptions and the Role of Welfare Regimes: A Comparative Analysis of University Students. *Administration & Society* 42(6): 638 –667.
- Senik, C., Stichnoth, H. y Van der Straeten, K. (2009). Immigration and Natives' Attitudes towards the Welfare State: Evidence from the European Social Survey, *Social Indicators Research*, 91(3): 345-370.
- Stuart Soroka, S. y Wlezien, Ch. (2014) "Economic Crisis and Support for Redistribution in the United Kingdom" en L. Bartels y N. Bermeo *Mass Politics in Tough Times: Opinions, Votes and Protest in the Great Recession*, Oxford Scholarship Online: DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199357505.001.0001.
- Svallfors, S. (1997). "Worlds of Welfare and Attitudes to Redistribution: A Comparison of Eight Western Nations", *European Sociological Review*, 13(3): 283-304.
- Svallfors, S. (1999) "Political trust and attitudes towards redistribution. A comparison of Sweden and Norway", *European Societies*, 1 (2): 241-268.
- [van Oorschot](#), W. (2006) Making the difference in social Europe: deservingness perceptions among citizens of European welfare states, *Journal of European Social Policy*, 16(1): 23-42.